

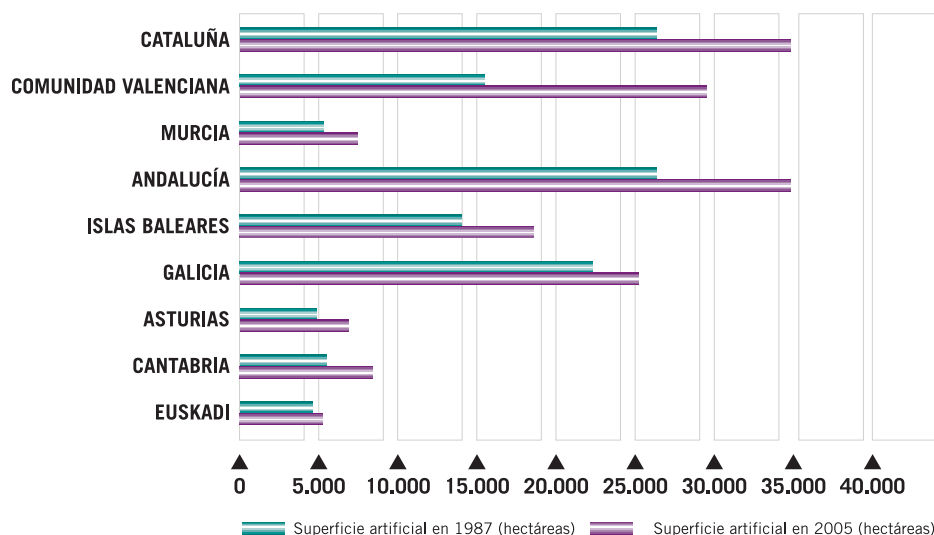
10 AÑOS DE DESTRUCCIÓN A TODA COSTA

DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA GREENPEACE HA REALIZADO UN EXHAUSTIVO ANÁLISIS DE LOS 8.000 KILÓMETROS DE COSTA ESPAÑOLA (10.000 KILÓMETROS SI SE TIENEN EN CUENTA RÍAS Y MARISMAS). EN ESTA DÉCIMA EDICIÓN DEL INFORME *DESTRUCCIÓN A TODA COSTA*, SE HAN RECOPIADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS CASOS MÁS DESTACADOS DURANTE TODO ESTE TIEMPO, QUE SE DESCRIBEN EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS¹.

La décima edición del informe *Destrucción a toda costa* se basa en la recopilación cuantitativa de todos los casos analizados por la organización en la última década. Precisamente, para sostener estos argumentos contamos en esta edición con los testimonios en primera persona de artistas, escritores, pescadores, abogados... que reflejan en sus escritos lo que significa la pérdida del litoral. Además, y como apoyo a este viaje por la costa durante los últimos años, Greenpeace ha recopilado un importante archivo de fotografías del pasado aportadas por socios y voluntarios de la organización. Las fotografías incluidas en el dossier central del informe, elaboradas por Pedro Armestre y tomadas exactamente en el mismo punto geográfico que las postales antiguas recopiladas por Greenpeace, muestran sin lugar a dudas esta destrucción.

A Greenpeace y a muchos otros grupos ecologistas que denunciaron reiteradamente los desmanes que se proyectaban en la costa se les acusó entonces de pretender frenar el desarrollo y el progreso del Estado. Pero el tiempo ha demostrado que este auge no puede ser permanente. La gran irresponsabilidad de los gobiernos no sólo estriba en haber negado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, lo que ha promovido la altísima corrupción política y forzado el monocultivo inmobiliario de este país. Sin, además, haber promovido otras actividades o industrias alternativas, como por ejemplo la investigación y la ciencia o las energías renovables.

No es la primera vez que Greenpeace destaca en su denuncia la enorme concentración de habitantes en el litoral: el 44% de la población española vive en los municipios



GRÁFICA 1. Diferencia en la superficie artificial (suelo equipado para urbanizaciones, zonas industriales, comerciales, etc.) por comunidades autónomas entre los años 1987 y 2005¹.

Fuente: elaboración propia a partir de Cambios de ocupación del suelo en España. A partir del proyecto "Corine Land Cover". IGN-CNIG y datos 2005 interpretación encargada por OSE a partir de imagen CLC 2005.

¹ Estos casos han sido denunciados en uno o varios informes de esta publicación y por tanto, sus referencias son los propios documentos.

costeros, que apenas representan el 7% del territorio. Además, la gran afluencia de turistas (el 80% de los casi 60 millones de personas que visitan España al año eligen la costa) y las actividades económicas que genera el masivo uso y ocupación de esta estrecha franja ha hecho que ricos e importantes ecosistemas litorales se hayan degradado a gran velocidad.

En el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral español como “negro”. Diez años después, los datos del propio Ministerio de Medio Ambiente confirman esta percepción: en algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Esta presión es especialmente relevante en las playas del arco mediterráneo, donde casi un 60% de las mismas están en entornos ya urbanizados.

Cabe destacar la actitud variable de la Administración General del Estado en lo referente a su política de gestión de la costa. Esta postura voluble y arbitraria se refleja a lo largo de las publicaciones. En 2004 se destacaba el compromiso para reorientar la política de costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este compromiso pretendía frenar el crecimiento de la ocupación de la costa, garantizar el acceso público a las playas y luchar contra la regresión costera. La entonces titular del Ministerio, Cristina Narbona, estableció un plazo de un año para determinar el estado general del litoral, diseñar una gestión sostenible, integrada y concertada de la costa y elaborar un Plan Director del Litoral. Sin embargo, en 2009 Greenpeace denunció la paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que se anunció en 2007 o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería). La gestión de la costa tiene una visión cortoplacista y sus objetivos se definen únicamente a cuatro años, lo que dura el periodo electoral.

10 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN

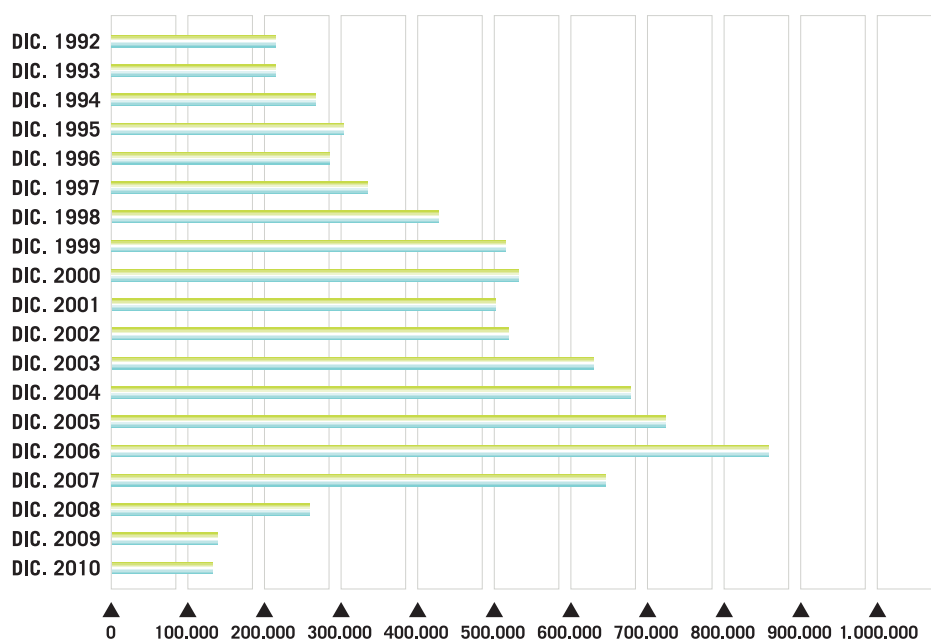
La mítica frase de “España va bien” del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, verbalizaba el reflejo del modelo de desarrollo que ha imperado en la costa durante la última década. En la actualidad en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Este suelo recalificado está esperando nuevos tiempos de bonanza económica para seguir depredando el territorio. La Federación de Promotores y Constructores estimaba en 2008 que España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero durante el periodo 2003-2007 se ha llegado a triplicar esta cifra.

La larga duración de esta fase alcista de ladrillo y hormigón y de bonanza inmobiliaria indujo a la población a habituarse a esta sinrazón, como si de algo normal y permanente se tratara (ver gráfica 2). Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados, que el Banco de España, entre otros, definió como de “economía suicida”.

La urbanización siempre ha sido uno de los principales problemas de la costa. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio (incluidos Espacios Naturales Protegidos) para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables. Entre 1990 y 2000 la población

GRÁFICA 2. Obras nuevas con licencia de obras desde 1992 a 2008.

Fuente: *Situación Inmobiliaria en España. Servicio de Estudios Económicos del BBVA, 2009.*

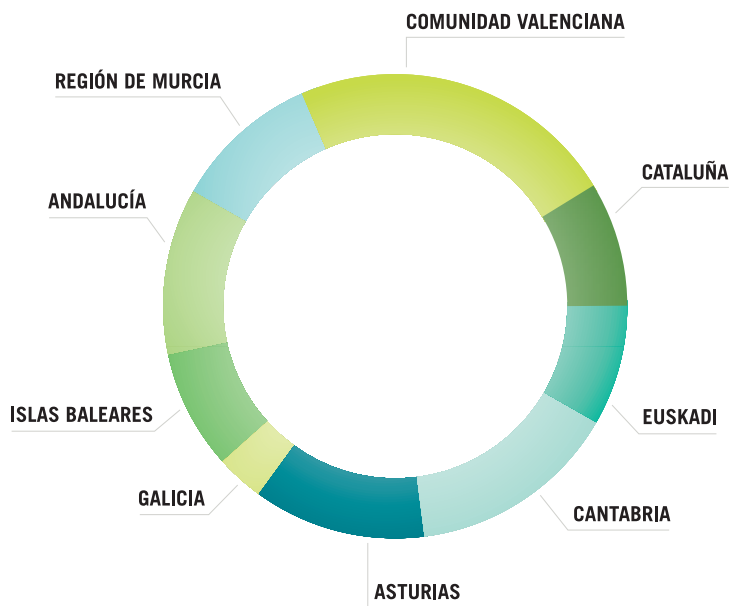


española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%. Este fenómeno, imparable desde hace cuatro décadas, se ha ido extendiendo hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: Murcia, Almería, Cádiz, Huelva y la costa cantábrica. En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo, elevándose esta cifra a más del 59% en Andalucía. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1,479.000 nuevas viviendas. La Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia superaban las 300.000 viviendas proyectadas y Galicia se quedaba a las puertas de esta cifra. La mayor parte de las nuevas residencias se concentraban en proyectos con campos de golf. Destaca Andalucía en donde había más de 150 campos de golf proyectados, seguida por la Comunidad Valenciana con 48.

En 2007 Greenpeace denunciaba que los ayuntamientos del litoral habían propuesto en sus planes urbanísticos la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas, lo que dejaba claro que la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no respondía al interés general sino a intereses privados. La construcción se había convertido en un potente motor económico que robaba al litoral el equivalente a tres campos de fútbol al día.

En 2008 las ventas de pisos en las zonas costeras descendieron un 30%. La crisis se ha cebado especialmente con el Mediterráneo, donde más se ha construido. En Cataluña las ventas cayeron un 50%; en la Comunidad Valenciana, un 41,1%; en Murcia, el 39,8% y en Baleares, un 29,4%. A los tres millones de casas vacías que había a finales de año, se añadían cientos de miles de viviendas ilegales. Todas ellas con una precariedad generalizada de recursos, en particular de agua dulce, que hace inviables la mayor parte de los desarrollos previstos, tal y como han demostrado los tribunales de Justicia.

El Ministerio de Medio Ambiente, responsable de prevenir, gestionar y evitar la degradación costera, no ha actuado correctamente, ya que es el autor de las peores actuaciones que se han llevado a cabo en la franja litoral. Por su gravedad sin precedentes, hay que



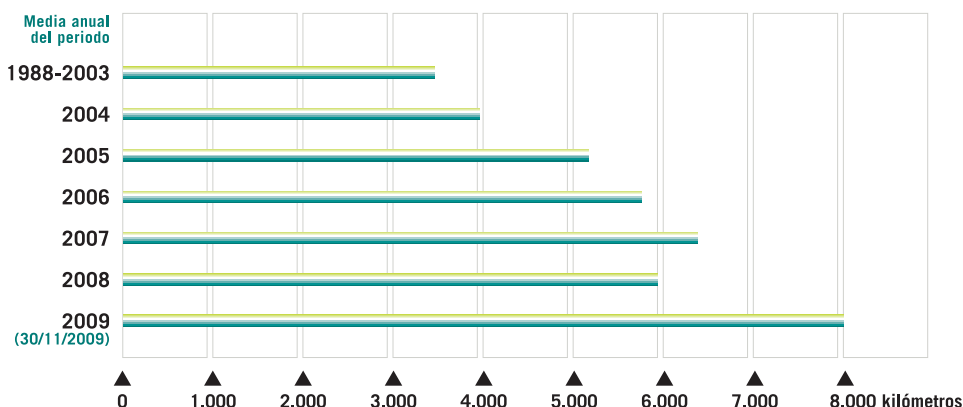
GRÁFICA 3. Incremento de la superficie artificial por comunidades autónomas entre 1987 y 2005 en los primeros 2 kilómetros de costa.

Fuente: elaboración propia a partir de Cambios de ocupación del suelo en España. A partir del proyecto "Corine Land Cover". IGN-CNIG y datos 2005 interpretación encargada por OSE a partir de imagen CLC 2005.

destacar la modificación de la Ley 22/1988 de Costas, aprobada a finales de 2002, camuflada dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Este cambio ha fomentado la ocupación más completa del espacio costero (llegando a autorizar construcciones a 20 metros del mar), supeditando la protección de la costa a los planes urbanísticos de los ayuntamientos y eliminando el carácter conservador de esta normativa.

En 1988, con la entrada en vigor el 28 de julio de la Ley 22/1988 de Costas, se dio un paso importantísimo para la conservación de los recursos naturales del litoral. Esta ley pretendía ser un freno importante en el proceso de degradación en el que se encontraba el litoral. La ley, en teoría, daba hasta cinco años para completar el deslinde, es decir, para delimitar el dominio público marítimo-terrestre en la costa española. Pero los diversos gobiernos estatales han hecho caso omiso de la norma y han aplicado este deslinde muy lentamente (ver gráfica 4).

Esta norma, amparada por la Constitución española, está amenazada por la falta de liderazgo en materia de protección de costa de la Administración General del Estado y por conflictos políticos con las comunidades autónomas. Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin



GRÁFICA 4. Evolución histórica de los deslindes en la costa. De los aproximadamente 10.200 kilómetros de bienes de dominio público marítimo-terrestre del litoral español se encuentra deslindado el 90%.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, noviembre 2009.

rebajas ni excusas. La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar y, si se aplica la ley con el mismo rasero, no tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa de El Algarrobico, asentado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos.

10 AÑOS DE TURISMO

Ya en 2003, la saturación de la franja costera, la contaminación y la desaparición acelerada de las playas estaba influyendo en el principal motor económico: el turismo, que comenzaba a resentirse tras años de maltrato continuado a la costa. El peso de la actividad turística ha seguido cayendo año tras año. Entre 2002 y 2004 visitaron España durante la época estival cinco millones menos de turistas que en años anteriores. Además, la ocupación media de los meses de verano acumulaba cinco años consecutivos de descenso pese a la desaceleración de precios.

El descenso en las cifras sobre los beneficios de la industria turística ha sido constante en la última década. En 2006 España seguía siendo el segundo destino turístico mundial, pero por tercer año consecutivo experimentaba una caída durante los meses de verano. El cambio de los hábitos turísticos parecía haberse consolidado y se estaba traduciendo en una disminución de la ocupación hotelera y de la rentabilidad de los establecimientos.

A pesar de que la saturación de la línea costera es la mayor responsable de los malos datos del turismo, entre 2000 y 2004 continuó creciendo el número de hoteles, destacando Andalucía con un aumento del 29%, seguida de la Comunidad Valenciana (22%) y Canarias (19%) sin que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomase medidas para impedir la ruina de este sector. De hecho, en 2004 el presupuesto necesario para mantener el conjunto de infraestructuras turísticas (aeropuertos, puertos, hoteles, playas, etc.) superó en un 25% a los ingresos producidos por el turismo. El desmedido consumo de recursos (suelo, agua, electricidad) y la degradación del medio que provoca esta actividad ha sido y es superior a los beneficios que reporta a la sociedad y, por tanto, insostenible.

En 2007 la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. A pesar de la bajada de rentabilidad, ese año se proyectó la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras, repartidas en su mayoría entre Andalucía (126.750), Canarias (52.500) y la Región de Murcia (23.000). En 2010ⁱⁱ EEUU desbancaba a España de su segundo puesto en el *ranking* mundial de llegadas, que ha quedado relegada a la tercera posición.

Muchas de las promociones turísticas que se han construido durante esta década han ido de mano de la fórmula indisoluble de urbanización asociada a campo de golf. A lo largo de los años se han promocionado urbanizaciones con la excusa del equipamiento deportivo, aun con el conocimientoⁱⁱⁱ de que el 80% de los jugadores en esos campos nunca ha llegado a comprar una vivienda. En 2008, existían tan sólo 330.000 federados al golf, un 0,67% de la población. En la actualidad hay en España 416 campos de golf. Un campo de golf necesita cada año entre 300.000 y medio millón de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.

“ Recuerdos y esperanzas

FERNANDO MARÍN CASTÁN. ABOGADO. EX DIRECTOR GENERAL DE COSTAS ENTRE 1996 Y 2000

El mar es más que un paisaje, también es un sentimiento,
es un corazón que late negándose a seguir muerto.

A por el mar, promesa y semilla de libertad

L. E. Aute

Muchas gracias Greenpeace por invitarme a celebrar con vosotros esta 10ª edición del anuario DESTRUCCIÓN A TODA COSTA.

Recuerdo diez años atrás, como si no hubiera pasado el tiempo, a Eva Hernández buscando información por todos los medios disponibles, con gran ilusión, rigor y eficacia, para reflejar en un breve pero completo documento el estado de nuestra costa y los graves problemas que la aquejaban. Y dio en el clavo.

El documento superó todas las expectativas, provocando infinidad de reacciones. Desde entonces hasta ahora el documento, superándose año a año con la ilusión de los equipos coordinados por Mario, María José o Pilar; se ha convertido en el observatorio de referencia obligada para conocer el estado real de nuestra costa.

Cuando nos siguen llegando a diario las espeluznantes imágenes de la incesante y vastísima mancha de contaminación que tiñe de muerte el maravilloso mar y las costas del golfo de Méjico, destruyendo indiscriminadamente flora y fauna, y también el medio de vida de millones de personas, no podemos sino constatar una vez más la estupidez no sólo de quienes han provocado directamente la catástrofe, sino también de quienes autorizaron o consintieron una explotación petrolífera en un lugar y en unas condiciones muy alejadas de su capacidad de control. No es ya que el ser humano sea el único capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, sino que parece empeñado en su propia autodestrucción.

Desde que en 1893 encallara el primer buque específico de transporte de crudo, el Gluckauf, a los siete años de su efímera existencia, provocando la primera marea negra conocida en Isla Fire (Nueva York), se han venido produciendo, en apenas un siglo, continuos episodios masivos de contaminación de la mar; además de la contaminación permanente en el tiempo provocada por lavados de sentinas o por escapes de mayor o menor intensidad en zonas especialmente sensibles, como la

babía de Algeciras o el entorno de las plataformas petrolíferas del delicado Mediterráneo, pudiendo cifrarse en cientos de millones las toneladas de crudo vertido a la mar. Pero, ¿cómo es posible que se autorice una perforación petrolífera nada menos que a 1.500 metros de profundidad, donde ningún ser humano es capaz de llegar y en la que se puede tardar meses hasta conseguir taponar el escape libre de petróleo que él mismo ha provocado?, ¿cómo podemos maltratar con semejante temeridad los elementos esenciales para nuestra propia subsistencia?

Las costas españolas, como las del resto del mundo, se habían conservado hasta hace apenas cien años en estado natural, con muy pocas y puntuales excepciones, insuficientes para alterar los procesos biológicos básicos. La mar proporcionaba buen clima, alimentos y posibilidad de transporte al ser humano y también enriquecía su espíritu y permitía dar rienda suelta a su ansia de libertad. La mar se manifestaba frente al ser humano como una fuente permanente y generosa de recursos y el ser humano la utilizaba al tiempo que la respetaba, sin apenas alterarla. Pero tras miles de años de esa convivencia pacífica, el ser humano idea un sistema de vida, consistente en una frenética carrera hacia no se sabe dónde, que pasa por apropiarse y destruir los ecosistemas esenciales y por explotar hasta la extenuación los recursos naturales. Y esta especie de locura colectiva, amparada cuando no fomentada por el poder público, ha roto la alianza con la mar: ya no es capaz de regenerar las balsas que le arrojamos y nos las escupe a la cara; de vez en cuando hace incursiones por sus riberas para intentar recuperar lo que le hemos arrebatado y sus más preciadas especies empiezan a enviar signos de extinción.

Frente a la concepción clásica del mar y sus riberas como cosas comunes a todas las criaturas que viven en este mundo, al igual que el aire que respiramos o las aguas de lluvia que satisfacen nuestras necesidades básicas, parece que se ha impuesto el derecho a su apropiación y, lo que casi todavía es peor, a su destrucción. El mar Mediterráneo, conservado durante miles de años en situación de equilibrio con una extraordinaria riqueza biológica capaz de alimentar a todas las grandes

civilizaciones surgidas en su entorno, en apenas sesenta años ha sufrido una espeluznante antropización que ha hecho irreconocibles sus riberas, ha contaminado sus aguas y ha agotado sus recursos, amenazando con convertirlo en un mar muerto.

Cuando llegué a la Dirección General de Costas no entendía cómo con una ley razonablemente buena y protectora del litoral se había podido llegar a esa situación, como tampoco entendía por qué tal Dirección, en contra de lo que consideraba su lógica orientación protectora de los ecosistemas costeros, se había enmarcado tradicionalmente en un Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pronto lo entendí al encontrarme todo su presupuesto (y el de años futuros) comprometido en paseos marítimos, farolas, regeneraciones efímeras de playas..., en definitiva, transformaciones artificiales de la naturaleza. Y seguí entendiéndolo cuando comprobé que el 90% de las solicitudes que se recibían tanto de particulares como de los representantes de las instituciones públicas se referían a más de lo mismo: puertos y más puertos, urbanizaciones, carreteras, dragados del fondo marino, polígonos industriales, paralización de los deslindes y desafectaciones del dominio público marítimo-terrestre, o concesiones para los usos más peregrinos y contrarios a su debida protección.

Ante tal panorama, o me volvía a mi casa o me buscaba aliados para intentar romper la inercia sin que me rompieran a mí la cara. Y los encontré donde naturalmente los podía encontrar: Greenpeace, WWF-ADENA, SEO, Ecologistas en Acción, ARCA, el GOB, ASCAN, Ben-Magec y otros muchos grupos ambientalistas locales. Gracias a ellos, al cambio de mentalidad en la Dirección General de Costas y a algún lúcido alcalde (como el llorado Onofre de Ferreries) se pudieron parar en aquel cuatrienio, si quiera temporalmente, unas cuantas atrocidades en la costa, como polígonos industriales o dañinos puertos (Granadilla, Campomanes, la ampliación del de Jávea, o el exterior de Ciudadela); se aceleraron los deslindes del dominio público (pasando de una media de 100 a 500 kilómetros al año, alcanzándose en 1999 el récord de 810 kilómetros), y se realizaron proyectos interesantes de restauración de ecosistemas dunares y marismas,

al tiempo que se inició una política de adquisición de espacios costeros vírgenes con fines exclusivos de protección (marismas de Joyel y dieciséis fincas en la querida isla de Menorca).

Pero las poderosas ambiciones, temporalmente contenidas, seguían ahí. La urbanización masiva de la costa ocurrida en el decenio 2000-2010, sólo comparable a la de los años 60 del siglo XX, denunciada año tras año en Destrucción a toda costa, unida a las sucesivas reformas, por vía directa o indirecta, de la Ley de Costas, ponen de manifiesto que no se puede bajar la guardia ni un milímetro y que la lucha es larga y dura.

La denuncia pública resulta esencial para poner delante de los ojos del ciudadano, normalmente suficientemente ocupado con sus asuntos laborales y domésticos, las barbaridades que de forma semiclandestina se cometen en los espacios comunes a todos. Todavía conservo en la retina la impresionante portada de la edición 2005 de Destrucción a toda costa: cuatro inmensas grúas y miles de toneladas de cemento tras el lloro en forma de roción de la mar, en el Parque Natural de Cabo de Gata. Una sola foto consiguió remover conciencias de Administraciones y ciudadanos. Pero con ello no bastó. Tuvieron que venir más acciones de Greenpeace, sufrir detenciones sus activistas, enfrentarse a reclamaciones millonarias, interponer recurso tras recurso para conseguir que la Justicia paralizara la construcción. Y todavía no se sabe finalmente qué pasará.

Y lo mismo con el puerto de Granadilla, con el polígono de la Aletas, con la ocupación y los vertidos tóxicos de la ría de Huelva, con las prospecciones petrolíferas entre la costa de Málaga y el Mar de Alborán o frente a las Canarias, con la sobreexplotación de la pesca, con la contaminación de la mar...

No nos resignemos. Somos muchos más los que queremos un mar rico que apoderarnos de sus riquezas; los que preferimos un mar limpio que intoxicado y un mar de libertad para todos los seres que lo habitan que un mar encadenado.

Gracias Greenpeace por estar siempre ahí, a la vanguardia en los ideales y en la acción. Enhorabuena Greenpeace por este décimo aniversario.

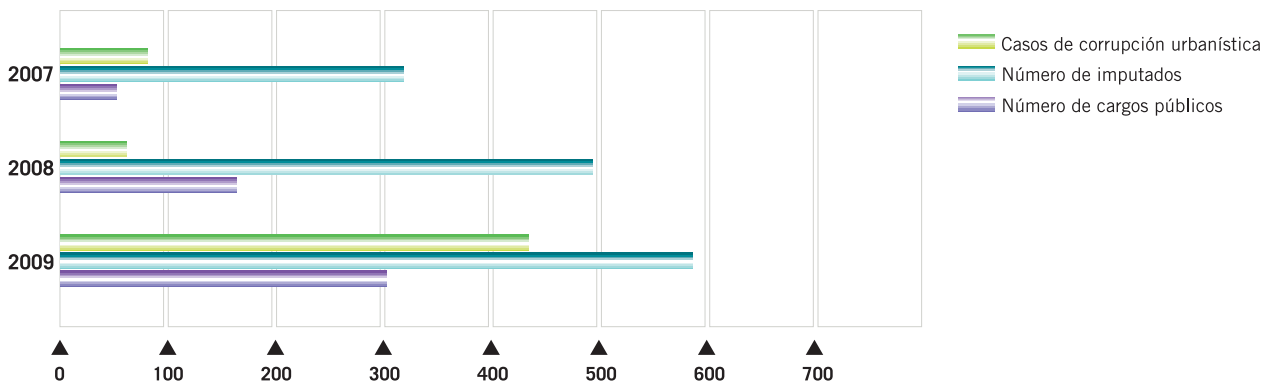
10 AÑOS DE CORRUPCIÓN

En muchos casos la batuta que ha dirigido la corrupción ha sido el urbanismo. Entre la perplejidad y la indignación, los ciudadanos han asistido durante todos estos años al desfile de políticos y ex políticos que comparecen ante jueces como imputados por prevaricación, cohecho, fraude fiscal y otros delitos perpetrados al amparo de un cargo público y destinados a llenar bolsillos privados. En 2005, España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Transparencia Internacional^{iv} que analiza 180 países. Uno de los casos más importantes de los últimos diez años es el saqueo de Marbella, donde se han defraudado 25 millones de euros.

En 2009 casi no pasaba una semana sin que un municipio o unos políticos regionales se viesan salpicados por un nuevo caso con origen en la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Hasta tal punto que la clase política y los partidos subieron ese año hasta el cuarto puesto de las preocupaciones de los españoles, por detrás del desempleo, pero por delante del terrorismo^v. Basándose sólo en los casos en investigación o ya juzgados, el rotativo *El Mundo* evaluó en 4.100 millones de euros el dinero desfalcado por la corrupción en los últimos diez años, el equivalente al coste de 50 hospitales de última generación. La mayor parte de los casos tienen que ver con la recalificación por parte de ayuntamientos de terrenos no urbanizables en zonas construibles.

La corrupción salpica a todos los partidos y se extiende por toda la geografía española, aunque el grueso se concentra sobre todo en el litoral mediterráneo, en los archipiélagos balear y canario, y en la Comunidad de Madrid. Más de 300 personas, políticos o empresarios, serán juzgados en 2010 por corrupción o tráfico de influencias.

En 2007 los casos de corrupción urbanística investigados por la Justicia en el litoral se elevaban a casi un centenar. Entonces, las fiscalías investigaban 89 casos que involucraban a más de 350 personas, muchas de ellas trabajadores públicos, entre ellos 55 alcaldes. Al año siguiente, eran 67 casos de corrupción urbanística, con 527 implicados, de los que 180 eran cargos públicos.



GRÁFICA 5. Evolución de los casos de corrupción asociada al urbanismo denunciados por Greenpeace.

Fuente: Informes *Destrucción a toda costa 2007, 2008 y 2009*.

Lamentablemente durante estos años los ciudadanos no han castigado a estos cargos públicos con la única herramienta de la que disponen, su voto. La mayoría de los alcaldes españoles acusados de corrupción se mantienen en su cargo tras las elecciones^{vi}. Siete de cada diez alcaldes acusados de estas prácticas fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007. Los escándalos de corrupción han tenido el mismo efecto, tanto en aldeas de menos de 5.000 habitantes como en ciudades de más de 50.000.

Y finalmente, muchos ciudadanos jugaron en esta década un papel importante ya que se convirtieron en nuevos inversores inmobiliarios, dedicándose a la compra venta de viviendas y contribuyendo en muchos casos al incremento de la burbuja inmobiliaria. Ciudadanos anónimos que buscaron un enriquecimiento rápido, sin duda favoreciendo la especulación y el aumento exponencial del precio de la vivienda. Tal y como denunciaba Greenpeace en 2006 *en España hay 50.000 millones de euros en billetes de 500, una cuarta parte de los emitidos por el Banco Central Europeo.*

10 AÑOS DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Históricamente, tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento. Este ministerio no ha cumplido con su promesa de racionalización de los proyectos de nuevos puertos del Estado o sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos, perpetuando una política fragmentaria que lleva a que cada Autoridad Portuaria se lance a una carrera en solitario para conseguir viabilidad financiera, luchando con el resto de puertos y sin prestar atención a las consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus actuaciones.

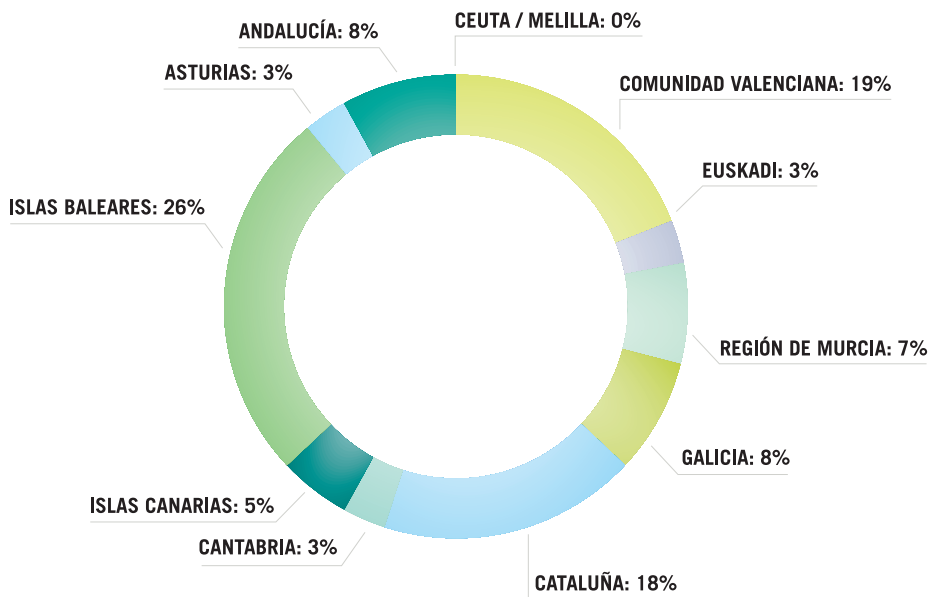
En 2003 se estaban llevando a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado. Ese año se aprobó también la construcción del nuevo puerto industrial en Granadilla, al sur de Tenerife, la zona más turística de toda la isla. Las inversiones en puertos habían aumentado un 505% en los últimos siete años, olvidándose de capítulos tan importantes como la seguridad o las medidas de lucha contra la contaminación que tan necesarias hubiesen sido ese año. De las instalaciones o ampliaciones en curso, diez de ellas estaban en Canarias, seis en Cataluña (a pesar de tener en vigor una moratoria) y cinco en la Comunidad Valenciana.

La costa libre de edificación se ha ido paulatinamente convirtiendo en una “reserva” con la que las administraciones portuarias han comerciado ante su falta de liquidez. Ejemplos de esta sinrazón han sido los proyectos de nuevos puertos como el exterior de A Coruña o el puerto industrial de Granadilla, que aun careciendo de viabilidad técnica, ambiental y económica, se han proyectado gracias a la generosidad europea y a los grandes negocios especulativos ideados por ayuntamientos y autoridades portuarias.

Paralelamente, la proliferación desmedida de puertos deportivos ha sido imparable (ver gráfica 5). Tan sólo en 2006 Greenpeace contabilizaba un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos que pretendían aumentar en 42.000 el número de atraques en el litoral. De toda la costa, Andalucía es la que presentaba más proyectos ese año (8.571 amarres), seguida de Baleares con 7.560 y la Comunidad Valenciana con 6.975. Las comunidades autónomas otorgan los permisos de construcción

de estas infraestructuras, que carecen de la necesaria planificación y gestión, por lo que han ocasionando graves problemas de erosión y contaminación.

En 2007 la construcción de puertos deportivos seguía imparable. Se añadieron un centenar de proyectos al litoral que suponían más de 38.000 nuevos amarres que seguían agravando los problemas de destrucción y privatización de grandes tramos costeros y la consecuente desaparición de muchos hábitats submarinos como las praderas de posidonia.



GRÁFICA 6. Porcentajes de puertos deportivos por regiones.

Fuente: Anuario 2008. Ministerio de Medio Ambiente.

10 AÑOS DE CONTAMINACIÓN

Estos últimos diez años de contaminación han estado marcados por las denuncias y sanciones de la Unión Europea debido al incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. La situación, lejos de cambiar, ha ido agravándose ya que nuevos requisitos ambientales llegan desde Europa cuando todavía hay pendientes tareas que tenían que haber sido hechas hace una década.

Precisamente, en mayo de 2010^{vii} la Comisión Europea ha decidido llevar a España al Tribunal Europeo por incumplimiento prolongado de la normativa comunitaria de depuración de aguas. Según el Comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, *las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores. Es inadmisible que hayan transcurrido más de ocho años desde el vencimiento del plazo y que [...] España siga sin dar cumplimiento a esta normativa tan importante.* Y es que son 38 las ciudades españolas que se han retrasado en la exigencia de depurar sus aguas antes de diciembre de 2000.

Sin embargo, esta historia tiene precedentes muy similares, relacionados con el abandono en España de los problemas de contaminación. En 2003^{viii}, España fue condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por incumplir las normas comunitarias sobre la calidad de las aguas de baño. En 2002 un informe de la Comisión afirmaba que *el número de zonas donde se prohíbe el baño (en España) se ha triplicado, y ha alcanzado un nivel jamás registrado desde la aplicación de la directiva de Calidad de aguas de 1976*. La Comisaria de Medio Ambiente de aquel momento dijo: *[...] está en juego la salud pública. Estoy impaciente por comprobar cómo España duplica su esfuerzo por garantizar la mejora de la calidad de las aguas de baño para beneficio del público y del medio ambiente*.

A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado de las urbanizaciones en la costa no se ha visto acompañado de las necesarias instalaciones para la depuración de aguas residuales. Y aunque se han ido construyendo nuevas depuradoras y ampliando y reparando las existentes, el ritmo ha sido muy inferior al necesario para subsanar los graves problemas de contaminación. Por otro lado, a lo largo de todos estos años se han ido destacando diferentes episodios de contaminación industrial en varios lugares icónicos y en los que el desarrollo ha derivado en elevados niveles de contaminación química. El polo químico de Huelva, la bahía de Algeciras, Cartagena, Tarragona y varias rías gallegas son algunos ejemplos.

La peor catástrofe ambiental en España de la década tuvo lugar en 2002. Ese año, el hundimiento del buque *Prestige* en la Costa da Morte provocó el vertido de 64.000 toneladas de fuel. Esta marea negra afectó a 3.000 kilómetros de costa y durante más de seis meses estuvo llegando este chapapote a las playas de toda la costa cantábrica. Siete años después no se olvidan las consecuencias del vertido y la revolución social que implicó la nefasta actuación de las administraciones responsables. Sin embargo, sí que parecen olvidados los compromisos políticos. Aún siguen sin existir, por ejemplo, la reforma del plan de contingencia o la designación de zonas de refugio en caso de accidente^{ix}.

Todavía queda mucho trabajo que hacer para que la contaminación deje de ser una de las principales causas del deterioro costero. La permisividad de las administraciones públicas con la industria y el abandono de sus responsabilidades respecto a las exigencias europeas no es un buen caldo de cultivo para combatirla.

LAS CIFRAS DE LA DESTRUCCIÓN A TODA COSTA

44%

El 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio.

8

En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.

+75% - +25%

En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial.

Urbanismo

20.000.000

En la actualidad en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas.

+25,4%

Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.

3.000.000

En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas.

3

La construcción robaba al litoral el equivalente a tres campos de fútbol al día en 2007.

3.000.000

En 2008 había en España 3.000.000 millones de viviendas vacías.

x3

En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra.

>30%

En 2008 la venta de pisos en la costa descendió un 30%. En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea.

\$

España es el país que más dinero público ha destinado en los últimos meses a sostener el sector inmobiliario.

416

En la actualidad hay en España 416 campos de golf. Un campo de golf necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.

Infraestructuras

505%

Entre 1998 y 2003 se incrementaron un 505% las inversiones en puertos del Estado.

x2

En 2006 se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1,479.000 nuevas viviendas.

42.000

En 2006 había un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos (42.000 atraques más).

Contaminación

CE

El Tribunal Europeo de Justicia condenó a España por incumplir las normas comunitarias sobre la calidad de las aguas de baño.

x3

En 2002 se triplicó el número de zonas en las que se prohibía el baño. *Un nivel jamás registrado desde la aplicación de la directiva de Calidad de aguas de 1976*, Comisión Europea.

38

En 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa de depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000.

Turismo

+25%

En 2004, el presupuesto necesario para mantener las infraestructuras turísticas (aeropuertos, puertos, hoteles, playas, etc.) superó en un 25% a los ingresos producidos por el turismo.

202.500

En 2007 la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. A pesar de eso, ese año se proyectó la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras.

Corrupción

23

En 2005, España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Transparencia Internacional^x que analiza 180 países.

50.000 millones

En 2006, había en España 50.000 millones de euros en billetes de 500, una cuarta parte de los emitidos por el Banco Central Europeo.

7

Siete de cada diez alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.

4.100.000.000

4.100 millones de euros han sido desfalcados en los últimos diez años, según *El Mundo*. El equivalente al coste de 50 hospitales de última generación o el gasto estatal en Cultura de toda una legislatura.

+300

Más de 300 personas, entre políticos y empresarios, serán juzgados en 2010 por corrupción o tráfico de influencias.